

Radio Metrópoli 19/05/2017. Periodistas y defensores de dh, oficios de alto riesgo

Gran conmoción han causado el asesinato de un periodista, Javier Valdéz Cárdenas, y el de una defensora de los derechos humanos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas.

Esta situación ha levantado todo tipo de protestas, tanto de periodistas como de defensores de los derechos humanos, así como la publicación de la situación que padecen estos dos oficios de altísimo riesgo, al grado de que, a nivel internacional, se considera a México como uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Y para el caso de las y los defensores de los derechos humanos, no es un menor riesgo. La cuenta de los periodistas asesinados es impresionante, 126 desde el año 2000. Para el caso de defensores de derechos humanos, no hay una cifra precisa, aunque se cuenta con un mayor número de personas amenazadas e intimidadas.

En contraste, se cuestiona el desempeño del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores que, para este año 2017 se le asignaron en el presupuesto de egresos de la federación, cero pesos con cero centavos. Ahí está la respuesta real del gobierno federal, más allá de la retórica y los discursos. Por eso, en un evento público realizado en estos días, cuando el presidente Peña Nieto declaraba que investigarían a fondo y cuando Miguel Ángel Osorio afirmó que se aplicaría toda la fuerza del estado, nadie les cree. Al presidente le chiflaron y le gritaron que se hiciera justicia. Lo cierto es que, en lo que llevamos de este siglo XXI, no hay una sola sentencia condenatoria por el asesinato de algún periodista, ya no digamos de los casos de homicidios contra defensores de los derechos humanos.

Es importante señalar que los asesinatos de periodistas y defensores tengan mayor relevancia que los otros asesinatos que se cometen en el país. Toda vida humana es valiosa por sí misma. Los casi 150 mil asesinatos acumulados en la supuesta guerra contra el narcotráfico, los más de 30 mil desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas por la violencia, nos cuestionan sobre muchos aspectos de nuestra gravísima crisis humanitaria en materia de derechos humanos.

En primer lugar, la reacción desproporcionada de funcionarios federales para descalificar las voces de expertos internacionales, no sólo del sistema ONU, también del sistema interamericano y de otros expertos internacionales que, en un informe reciente, señalan a México como el segundo lugar mundial de mayor violencia, sólo después de Siria. Y eso que en este país del medio oriente está en guerra civil y coloca a las potencias mundiales en un complejo ajedrez militar en el que se juega la paz mundial. Eso sí, en México no existe conflicto armado, como declaran con insistencia los delegados mexicanos en todos los exámenes que les aplican los comités de los tratados internacionales de derechos humanos. La descalificación como política de estado y casi siempre con los mismos argumentos: falsas metodologías, fuentes poco confiables y, la clásica descalificación al Ex Relator contra la tortura, Juan Ernesto Méndez, ‘un trabajo poco ético y profesional’. Esa es la salida del gobierno federal cuando hay graves señalamientos. O la verborrea que ya nadie cree, de que irán a fondo, caiga quien caiga. El caso es que los victimarios de Javier Valdéz Cárdenas y Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, periodista el primero y defensora la segunda, saben que la impunidad imperante en México es su mejor carta para seguir actuando, como en el caso de los victimarios de otra periodista, Miroslava Breach Veraluce, hasta amenazar al mismo gobernador de Chihuahua, al que simplemente le dijeron “vamos por ti”.

En contraste con la tibieza del gobierno y su clara voluntad política de no asignar recursos al Mecanismo de Protección, periodistas y defensores de todo el país se han manifestado de diversas formas, en actos de protesta, plantones, mítines, marchas y desplegados de todo tipo exigiendo sólo una cosa: verdad y justicia. Privarnos violentamente de periodistas y defensores es una grave lesión a toda la sociedad, que requerimos algo tan fundamental como estar informados de lo que realmente sucede y que se defienda, proteja y garanticen derechos fundamentales como el derecho a la vida.